

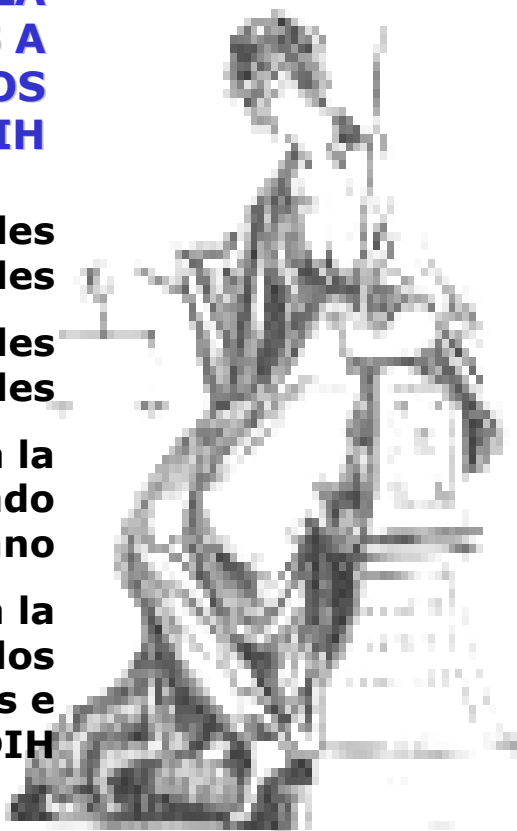


BOLETIN TEMATICO

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
No. 4 - marzo de 2005

PROYECTO DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH

- **Surgimiento de los tribunales penales internacionales**
 - **Principios de los tribunales internacionales**
- **Avances en la lucha contra la impunidad por parte del Estado colombiano**
- **Proyecto de Lucha contra la Impunidad de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH**



.....
Calle 7 No. 6 - 54 Tel. 3345077 Fax. 5662064

<http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio>

obserdh@presidencia.gov.co

Bogotá, D.C.



SURGIMIENTO DE LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES

Observatorio de Derechos Humanos
Programa Presidencial de DDHH y DIH

La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia; templados, realizando actos de templanza; valientes, realizando actos de valentía.

Aristóteles

Los estragos ocasionados por la Primera Guerra Mundial (1914-1918), hicieron evidente la necesidad de establecer un código penal internacional que, al igual que una corte penal internacional, permitiera castigar los crímenes cometidos en desarrollo de esta confrontación.

Entre los intentos que se destacan en la historia para consolidar estos instrumentos, se encuentran el tratado de Versalles (1919) que en su artículo 227 establece que el ex Kaiser Guillermo II debía ser sometido a pública acusación ante un tribunal, conformado por jueces pertenecientes a las principales potencias, "por ofensas supremas contra la moral internacional y la autoridad sagrada de los tratados". Este intento fracasó debido a que las autoridades de los Países Bajos se negaron a extraditar al imputado. En el mismo tratado, en los artículos 228 al 230, se establece que el Gobierno alemán debía entregar a las potencias aliadas todos los individuos acusados de haber cometido actos violatorios de las leyes y costumbres de guerra. Finalmente, los acusados fueron juzgados por los tribunales alemanes y recibieron castigos leves.

Como segundo antecedente se encuentra la conformación de los tribunales de Nüremberg y Tokio. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores firmaron el 8 de agosto de 1945 en Londres, el acuerdo para el procesamiento y castigo de los criminales de guerra del Eje. Mediante este acuerdo se crearon tribunales internacionales para juzgar a los dirigentes políticos y militares de Alemania y Japón.

La Ley No 10 del Consejo de Control Aliado en Alemania constituyó el Tribunal de Nüremberg en noviembre de 1945.

[1] Contexto elaborado con información de: a) Revista Cemos Memoria, No 166 diciembre de 2002, tercer milenio, artículo: Camino hacia la corte penal internacional, Gisela González Guerra. b) Comité Internacional de la Cruz Roja, "El derecho internacional humanitario" (folleto), CICR, Ginebra, s. F. c) "Estatuto de la Corte Penal Internacional", edición especial de Universidad Iberoamericana, Coalition for an International Criminal Court y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., México, 2001. d) Tribunal Penal Internacional, Carolina S. Anello, tesis de abogada Universidad de Buenos Aires.

Por otra parte de igual manera, la Proclama especial del Comandante Supremo de las Potencias Aliadas adoptada en Tokio el 19 de enero de 1946, ordenó el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente.

Con el fin de evitar sesgos en el juzgamiento de los criminales de guerra y garantizar imparcialidad, el Tribunal Militar de Nüremberg, adquirió un carácter internacional. Con relación a los imputados a llevar ante este Tribunal, se determinó que serían los considerados como grandes criminales de guerra, entendiéndose que aquellos clasificables como pequeños o medianos delincuentes por haber cometido similares delitos deberían ser juzgados por las instancias jurídicas nacionales. En cuanto a los crímenes, el Tribunal juzgaría los denominados delitos contra la paz, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. Algunos de estos últimos como el homicidio en masa de civiles, fueron expresamente descartados pues los Aliados debieron aceptar que ellos también los habían cometido al realizar bombardeos masivos de grandes concentraciones urbanas.

El Tribunal Internacional de Nüremberg, fijó un criterio que sigue aplicándose en la actualidad en cuanto a las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, que consiste en que la responsabilidad y el castigo en estos casos es estrictamente individual^[2]. Castigar a un Estado como tal, es imposible de hacer sin afectar también a inocentes y a menudo llevaría a operaciones de guerra.

Para una normatividad que busca ser justa apuntando sólo a los culpables y recurriendo a métodos pacíficos de enjuiciamiento y castigo, el criterio de la responsabilidad individual es el único válido.

Este Tribunal rechazó la vieja teoría de los “actos de gobierno”, que serían aquellos decididos por altas autoridades nacionales y no susceptibles de ser juzgados por tribunales, sino a lo sumo posibles de control de constitucionalidad. También se fijó en Nüremberg la posibilidad de castigar a todos los implicados en una conspiración criminal para realizar crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos, aunque no participaran en la ejecución material de los mismos. También se plasmó la procedencia de declarar como organización criminal a determinadas instituciones (ejemplo: la Gestapo en Alemania) asignadas a tareas de represión militar o policial violatorias del derecho internacional.

El Tribunal Militar de Nüremberg condenó a pena de muerte a 12 jerarcas nazis, hubo siete sentencias de encarcelamiento, tres suspensiones y se declaró con el título de criminales a organizaciones como la SS, la Gestapo, el cuerpo comandante del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores y el Servicio de Inteligencia.

^[2] Responsabilidad penal individual

De igual forma procedió el Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente, en el que se condenó a pena de muerte a siete jefes y altos mandos militares japoneses y se impuso penas privativas de la libertad a otros dieciocho acusados.

Ambos tribunales (Nuremberg y Tokio) recibieron muchas críticas por tratarse de autoridades creadas por los vencedores del conflicto para juzgar los crímenes de las potencias vencidas y por la vulneración a los principios de legalidad.

Sin embargo, los estatutos constitutivos de los tribunales de Nuremberg y Tokio representaron un cambio sustancial en la materia, ya que por primera vez se distinguía entre crímenes contra la paz, crímenes de guerra, y crímenes contra la humanidad, pudiendo ser acusados los individuos aún cuando alegaran haber actuado como funcionarios de un Estado.

Otro antecedente es la creación de tribunales "ad hoc" para juzgar a los presuntos culpables de violaciones al Derecho Internacional Humanitario en la ex Yugoslavia y el creado para juzgar a los responsables de genocidio y otras violaciones del DIH cometidos en Ruanda.

El Tribunal de la ex Yugoslavia fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante Resolución 827 del 25 de mayo de 1993.



Su función era juzgar los actos violatorios del DIH, así como la existencia de "campos de concentración" y la aplicación de una política de "depuración étnica" cometidos a partir del 1 de enero de 1991. De acuerdo con el artículo 9 del estatuto de este Tribunal, el ejercicio de su jurisdicción se extendió a los tribunales internos, estableciendo una primacía del Tribunal Internacional sobre aquellos.

El Tribunal Internacional de Ruanda fue creado el 8 de noviembre de 1994, mediante la Resolución 955 del Consejo de Seguridad de la ONU y fue modificado el 30 de abril de 1998 por la Resolución 1165 del mismo organismo.



Tenía competencia para juzgar a los presuntos culpables de los delitos de genocidio y otras infracciones al DIH, tanto en el territorio de Ruanda como en los países vecinos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 1994. El Tribunal Internacional de Ruanda fue creado el 8 de noviembre de 1994, mediante la Resolución 955 del Consejo de Seguridad de la ONU y fue modificado el 30 de abril de 1998 por la Resolución 1165 del mismo organismo. Tenía competencia para juzgar a los presuntos culpables de los delitos de genocidio y otras infracciones al DIH, tanto en el territorio de Ruanda como en los países vecinos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 1994.

Estos dos tribunales fueron instituidos en el marco del capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, en momentos en que el Consejo de Seguridad determinó que la situación en ambos países constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacional. A pesar de ser tribunales “ad hoc” han demostrado su efectividad, respetando las normas del debido proceso y los principios de objetividad e imparcialidad.

Finalmente, en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas celebrada en Roma el 17 de julio de 1998, se adoptó el estatuto mediante el cual se creó la Corte Penal Internacional, con personalidad jurídica internacional autónoma, de carácter permanente, independiente y vinculada al sistema de las Naciones Unidas. La competencia de la Corte es la de juzgar a los individuos responsables por el mandato, orden, atribución de los crímenes de trascendencia internacional, como los crímenes de guerra, y de lesa humanidad, de agresión y genocidio.

El [Estatuto de Roma](#) por el cual se creó la Corte Penal Internacional entró en vigencia el 1 de julio de 2002 y fue ratificado por lo menos por 60 estados.



PRINCIPIOS DE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

Observatorio de Derechos Humanos
Programa Presidencial de DDHH y DIH

En cuanto a tratados, el derecho penal relacionado con el DIH está constituido por las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949.

Entre los principios que rigen a los tribunales internacionales se encuentran entre otros:

✚El principio de la jurisdicción universal, se refiere a la jurisdicción sobre los delitos, independientemente del lugar en que se cometieron o la nacionalidad del perpetrador. Se aplica para casos de crímenes de guerra e implica que los acusados pueden ser perseguidos independientemente de su nacionalidad y del lugar donde hayan cometido sus delitos.

En los cuatro Convenios de Ginebra se introdujo la aplicación de la jurisdicción universal para las infracciones a los Convenios que se califican como graves; de acuerdo con los Convenios, "los Estados tienen la obligación de buscar a las personas acusadas sea cual fuere su nacionalidad, y deben hacerlas comparecer ante los propios tribunales o entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante"^[3].

✚El principio de individualidad, implica que toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable del mismo y sujeta a sanción.

✚El principio de *Non bis ibidem* postula que no se puede juzgar dos veces a la misma persona por el mismo hecho, se constituye en una garantía consagrada en instrumentos internacionales de derechos civiles y políticos, algunos de ellos ratificados por Colombia y tiene carácter de derecho fundamental susceptible de ser protegido mediante tutela.

✚El principio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, fue promovido por las Naciones Unidas y establecido mediante la Convención sobre la imprescriptibilidad firmada el 26 de noviembre de 1968.

^[3] Con información del Comité Internacional de la Cruz Roja. www.icrc.org



Entre los crímenes considerados como imprescriptibles por la Convención "cualquiera que sea la fecha en la que se haya cometido", se encuentran entre otros los consignados en su Artículo 1:

a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 13 de febrero de 1946 y de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las "infracciones graves" enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra;

b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, (...), así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos^[4].

^[4] Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Con información de la página Web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

www.ohchr.org/spanish/law/crimenes_guerra.htm



AVANCES EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD POR PARTE DEL ESTADO COLOMBIANO

Observatorio de Derechos Humanos
Programa Presidencial de DDHH y DIH

Los avances más recientes del Estado colombiano en materia de lucha contra la impunidad se pueden ubicar a partir de la expedición del Nuevo Código Penal colombiano que fue reglamentado por la Ley 599 de 2000 que entró en vigencia en julio de 2001.

El Nuevo Código incorporó como tipos penales autónomos todas las conductas que se consideran como infracciones al DIH. Estas conductas están tipificadas en el Título II, especialmente del artículo 135 al 164. En este articulado se sancionan las conductas proscritas por el Derecho Internacional Humanitario, entre ellas^[5]:

El homicidio	Las lesiones
Las torturas	Los abusos sexuales en persona protegida
La utilización de medios de guerra ilícitos	La perfidia
Los actos de terrorismo	Los actos de barbarie
Los tratamientos inhumanos y degradantes	Los experimentos biológicos
Los actos de discriminación racial, la toma de rehenes	Los actos de represalia y la privación del debido proceso
El constreñimiento a apoyo bélico	El despojo en campo de batalla
La omisión de medidas de socorro y de asistencia humanitaria o la obstaculización de las mismas	La destrucción de bienes de carácter sanitario
La destrucción de bienes culturales o de culto	Los ataques contra obras que contengan fuerzas peligrosas
Las represalias	La deportación
La devastación	Los ataques a la subsistencia
La expulsión o el desplazamiento forzado de la población	La omisión de medidas de protección a la población civil como el reclutamiento, las acciones o contribuciones arbitrarias y la destrucción del medio ambiente

^[5] Con información de: Ministerio de Defensa Nacional. Informe Anual de Derechos Humanos año 2002. Bogotá. Colombia. Pág. 46.

Entre los avances más notables del Nuevo Código Penal está el otorgarle a la justicia penal ordinaria herramientas que le permitan sancionar delitos como la desaparición forzada, el genocidio y la tortura.

Otra medida asociada a la lucha contra la impunidad es la adopción del Nuevo Código Penal Militar expedido en 1999 mediante el cual se precisan los delitos que guardan relación con el servicio en las instituciones militares. Así mismo, el Código delimita las competencias, sustrayendo del conocimiento de la jurisdicción penal militar los delitos de lesa humanidad; separando las funciones jurisdiccionales de la organización jerárquica del cuerpo, con el fin de garantizar total independencia de los jueces, separando la función de acusación de la de investigación; garantizando la defensa técnica y el acceso de la parte civil al proceso. Adicionalmente reguló el ejercicio de la acción indemnizatoria y consagró que la intervención del Ministerio Público se ejerciera directamente desde la Procuraduría General de la Nación.

Pero tal vez el avance más notable en el Nuevo Código Penal Militar radica en prohibir que delitos como la desaparición forzada, el genocidio y la tortura sean conocidos por la jurisdicción militar, con lo cual abrió paso para que el militar y/o el policía sindicado comparezca ante la justicia ordinaria^[6].



^[6] Ministerio de Defensa Nacional. Informe Anual de Derechos Humanos 2002. Pág. 47. Bogotá. Colombia.

ARTICULO



PROYECTO DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH

Observatorio de Derechos Humanos
Programa Presidencial de DDHH y DIH

El Gobierno nacional tiene entre sus objetivos garantizar el buen funcionamiento de la justicia, que considera como el fundamento de la seguridad, de la convivencia pacífica y de la democracia, tal y como lo ha expresado en la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

Por ello ha venido consolidando el Proyecto de Lucha contra la Impunidad de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, adscrito al Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República. La función de este Proyecto, es la de “contribuir a que el Estado refuerce sus acciones y estrategias hacia la prevención y fortalecimiento de la lucha contra la impunidad, dé una respuesta adecuada a las víctimas, trabaje armónicamente con los organismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, racionalice el funcionamiento de las instituciones encargadas de su garantía, promoción y protección e impulse medidas efectivas de aplicación del Derecho Internacional Humanitario”. [7]

Entre sus objetivos está apoyar la labor que viene realizando el Comité Especial de Impulso a las Investigaciones de Violación sobre Derechos Humanos [8].

La función central del Comité es la de promover las investigaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos, así como vigilar, controlar y coordinar su desarrollo a través de una colaboración armónica entre las distintas instituciones concernidas en la materia e informar los resultados de esas gestiones. [9]

[7] Funciones del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. En www.derechoshumanos.gov.co

[8] El Comité es presidido por el Vicepresidente de la República, e integrado por el Ministro de Interior y Justicia, el Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la Nación. También asisten como invitados especiales el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Director de la Oficina en Colombia del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

[9] Programa Presidencial de DDHH y DIH. Informe Anual de Derechos Humanos y DIH 2003. Pág. 23. Bogotá, Colombia.

En este sentido, en el año 2003 el Proyecto de Lucha Contra la Impunidad presentó al Comité Especial de Impulso el *Proyecto Bases para una estrategia de gestión y coordinación interinstitucional de lucha contra la impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH*, aprobado en junio de ese mismo año.

El Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, adoptó para todos los fines el concepto de impunidad señalado en el "Informe Final del Relator Especial sobre Impunidad y Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad: *"Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria. Porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.* [10]"

Entre los objetivos principales del proyecto se encuentra:

- ✦ Selección definitiva de los casos a impulsar con participación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y todas las instancias del Estado.

- ✦ Por solicitud de esta Oficina en 2003 se priorizaron 21 de los 137 casos seleccionados por el Comité de Impulso.

- ✦ Aprobación de un reglamento de cooperación que fija los parámetros para ordenar las acciones administrativas del Comité Especial de Impulso y el Grupo de Trabajo.

- ✦ Elaboración de estrategias para lograr una mayor eficiencia en la investigación de los 21 casos definidos a través del ordenamiento y financiación de algunas acciones de impulso como la realización de comisiones especiales de investigación, la práctica y protección de pruebas, la protección de testigos, víctimas, familiares de víctimas y algunas otras actividades complementarias.

- ✦ Elaboración de un marco para el diseño de una política pública en la materia. Cabe resaltar que esta política deberá ser presentada al Comité Especial de Impulso para su aprobación.

[10] Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1. Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los Derechos Humanos (Derechos Civiles y Políticos) preparado por el Sr. L. Joinet, de conformidad con la resolución 1996/119 de la subcomisión en Programa Presidencial de DDHH y DIH. Informe Anual de Derechos Humanos y DIH 2003. Pág. 23. Bogotá, Colombia.



En el año 2004 algunas de las acciones llevadas a cabo por el Proyecto de Lucha contra la Impunidad fueron la estructuración de un Sistema de Gestión y Coordinación Interinstitucional cuyos objetivos son^[11] formular e implementar una política pública; así como impulsar y hacer seguimiento a un número determinado de investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos y al DIH.

Por otro lado, se ha propiciado una cultura de coordinación entre las instituciones que hacen parte del Comité Especial de Impulso a las Investigaciones que se ha visto reflejado en la regularidad de las reuniones del Comité y de su Grupo de Trabajo, quienes a lo largo del año 2004 han adoptado medidas para superar algunos obstáculos que se han presentado.

Durante el 2004, en el marco de los dos objetivos del Sistema de Gestión y Coordinación Interinstitucional, el Comité ha adoptado medidas particulares como la expedición de dos resoluciones: una por parte de la Fiscalía General de la Nación,

No. 4117 del 30 de agosto de 2004, "Mediante la cual se reglamentan las funciones de la Fiscalía General de la Nación en el Comité Especial de Impulso a las investigaciones de violaciones a los Derechos Humanos" y la segunda por parte de la Procuraduría General de la Nación, No. 327 del 24 de agosto de 2004, "Por la cual se implementan las medidas al interior de la Procuraduría General de la Nación, con fundamento en el Decreto Presidencial No. 2429 de 1998, mediante el cual se creó el Comité Especial de Impulso a las investigaciones por violación de Derechos Humanos."

Mediante estas resoluciones, vinculantes para todos sus funcionarios, el Fiscal y el Procurador General de la Nación, reconocieron la importancia del impulso de los casos seleccionados por el Comité Especial. Así mismo, se comprometieron a trabajar armónicamente para optimizar las investigaciones mediante el intercambio de información y de pruebas. Adicionalmente, se comprometieron a mantener al Comité informado de los avances en las investigaciones referidas.

^[11] Descripción del Proyecto de Lucha contra la Impunidad, en el Convenio firmado Colombia - Países Bajos, julio de 2003.

Adicionalmente, se dispusieron planes semestrales de acción para el impulso y seguimiento de las investigaciones escogidas por el Comité Especial. Mediante este compromiso, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación disponen ahora de las herramientas para planear sus investigaciones de manera más metódica, aprovechando las estrategias regionales para identificar, capturar, y acusar a los responsables de los crímenes, los cuales obedecen, en su gran mayoría, a una serie de acciones sistemáticas de grupos al margen de la ley.

De acuerdo con las recomendaciones de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, se tomó la decisión de concentrar esfuerzos en el esclarecimiento de los casos considerados más críticos. En tal sentido, durante el año 2004, lo más relevante ha sido las recomendaciones que el Proyecto formuló al Comité Especial, en su sesión de septiembre, para que tuviera resultados más eficaces.

En desarrollo de dichas recomendaciones, se ordenó la creación de un grupo especial de detectives dedicado exclusivamente a la ejecución de las órdenes de captura pendientes en estos casos. Conforman dicho grupo miembros de la DIJIN y de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.

En cuanto al objetivo de formular e implementar una política pública en esta materia, el Proyecto presentó al Comité Especial de Impulso en su última reunión en el mes de diciembre de 2004, una propuesta de estrategia. Dicho documento se construyó a partir de la experiencia obtenida por el Proyecto al impulsar los casos a través de decisiones políticas que viene adoptando el Comité Especial y fue puesto a consideración de las instituciones que lo conforman para sus observaciones y posteriormente realizar una nueva reunión en la que se discutirá la estructura, estrategias y contenidos de una política pública en materia de lucha contra la impunidad.

Esta estrategia contempla, en uno de sus capítulos, el fortalecimiento de la administración de justicia. Este proceso se hace a través de tres fases, diagnosticar las instituciones (fortalezas y debilidades), presentar un análisis con recomendaciones para el fortalecimiento institucional e, implementar dichas recomendaciones.

Para cumplir con este objetivo se inició el diagnóstico de la Unidad Nacional de DDHH y DIH de la Fiscalía General de la Nación. Este proceso se adelanta conjuntamente con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en desarrollo de las recomendaciones formuladas por esta Oficina y en cumplimiento de su función de asesoría y asistencia técnica.

De igual manera se adelantaron acciones para el fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación. La primera acción que adoptó el Proyecto para el fortalecimiento de esta institución fue la financiación del sistema Link, consistente en un software para el análisis de pruebas.

En este sentido esta institución adelantó recientemente un diagnóstico que será complementado con las acciones que el Proyecto emprenda para fortalecer su función disciplinaria y la del Ministerio Público para derechos humanos. Este proceso está previsto para el mes de diciembre de 2004, enero y febrero de 2005.

Finalmente se elaboró un proyecto para la sistematización interinstitucional con el objetivo de establecer conexión en línea entre la Vicepresidencia de la República, el Programa Presidencial de DDHH y DIH, el Proyecto de Lucha contra la Impunidad, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Protección Social y el Ministerio del Interior y de Justicia que permita acceder a una información completa y actualizada sobre las investigaciones que cursan por violaciones a los derechos humanos y DIH, especialmente los casos seleccionados por el Comité Especial de Impulso.

Durante los años 2003 y 2004 han sido notables los avances del Gobierno nacional en su campaña de lucha contra la impunidad, para el 2005 se tiene previsto seguir avanzando en la consolidación de una política pública que

le permita al país disminuir la comisión de delitos que atenten contra los derechos humanos de los colombianos. Para ello el Gobierno a través del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH trabaja continuamente para perfeccionar y hacer más efectivos los mecanismos de control implementados para combatir la impunidad.

Estadísticas

En el año 2003 el Comité Especial de Impulso ordenó 19 comisiones de investigación judicial, tanto a la Fiscalía General de la Nación como de la Procuraduría General de la Nación, la cuales arrojan un resultado importante en materia de capturas y de judicialización de los responsables.

En 2004 el Proyecto financió un total de 109 comisiones de investigación a la Fiscalía General de la Nación discriminadas en 7 Comisiones regionales realizadas en Caquetá, Norte de Santander, Cauca, Barrancabermeja, Guajira - Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Santander-Barranquilla y 102 Comisiones Individuales.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación llevó a cabo 18 comisiones de investigación.

